

Universidad

A LOS UNIVERSITARIOS DEL PAIS A LA OPINION PUBLICA NACIONAL AL C. LIC. MANUEL BARTLETT

SECRETARIO DE GOBERNACION:

El signo social de Sinaloa parece ser la violencia. Esta no sólo es producto de la aguda crisis económica que afecta a los sectores más desprotegidos, sino también de la incapacidad del gobierno del estado para resolver por la vía del diálogo y el entendimiento los problemas sociales que aquejan a nuestra entidad.

Resultado de esta situación de intolerancia y cerrazón oficial, el día de ayer, 12 de enero de 1983, dos trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa: Rosario y Alejo Uzarraga, padre e hijo, fueron asesinados en el predio Tultita del municipio Salvador Alvarado, en momentos en que junto a un grueso contingente de universitarios, daban solidaridad a una comunidad urbana en formación.

Los agresores —protegidos e instigados por las policías municipal y judicial, así como por las mismas autoridades del municipio, uno de ellos segundo regidor del mismo— fueron los que dispararon contra los compañeros colonos y universitarios, y los que ultimaron a sangre fría a dos de nuestros compañeros.

Un indicio que viene a evidenciar la gravedad de la situación de violencia institucionalizada y del criminal acto que denunciarnos, lo constituye la intención explícita de las autoridades judiciales del gobierno del estado de hacer culpables a quienes fueron agredidos: los colonos y universitarios. Prueba de que esto se persigue es que, de manera alevosa y premeditada, fueron detenidos el profesor de la

preparatoria de Salvador Alvarado, César Bojórquez y el colono José Luis Navarrete.

En estos momentos el predio donde se suscitaron los acontecimientos está rodeado por las policías municipal y judicial; existe la seria amenaza de que sean víctimas de una nueva agresión quienes allí se encuentran.

Los hechos criminales que hoy nos ocupan y que denunciarnos con toda energía, no son, lamentablemente, los únicos que se han cometido en el último tiempo contra los universitarios y el pueblo de Sinaloa: como consta tanto a la opinión pública estatal y nacional, más bien ocurre que ningún sector social ha escapado a la situación de violencia generalizada que, en una alta proporción, tiene su origen en los mismos aparatos policiacos, según pruebas fehacientes y reiteradas. La Universidad Autónoma de Sinaloa no puede callar tal estado de cosas, mucho menos cuando los universitarios son directas víctimas de tal proceder arbitrario y nada civilizado como antes hemos denunciado:

—En el mes de agosto de 1982 fue asesinado el profesor de la UAS, Alberto Barrionuevo, sin que hasta la fecha el crimen se haya esclarecido, a pesar de promesas del procurador de Justicia;

—En noviembre del año pasado la estudiante de la UAS, Norma Alicia Meza López, fue también asesinada sin que hasta la fecha hayan sido castigados los responsables.

Estos son casos recientes de miembros de la UAS, que han consternado a la opinión pública local, que mencionamos para no referirnos a muchos otros que conoce la opinión pública nacional y que han recogido puntualmente los medios de comunicación.

La comunidad toda de la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene la convicción profunda de que, en momentos en que el país y el estado son presa de una crisis económica sin precedentes, es responsabilidad directa de los órganos del Gobierno Federal asumir una responsabilidad muy grande en la vigencia de un estado verdadero de derecho, en el imperativo de auténticas libertades públicas, que en primer lugar implica asegurar el respeto a los derechos y a la vida ciudadanos, a las garantías que reclaman todos y cada uno de los grupos sociales. Nosotros, como el país, creemos que así deben concretarse los postulados de una real renovación moral de la sociedad. Porque se trata, en definitiva, de dar voz y fuerza a la sociedad civil y desechar todo signo autoritario.

Demandamos de las más altas autoridades de la Nación, así como de los universitarios y de la opinión pública, exijan junto con nosotros el esclarecimiento de estos hechos, el deslinde de las responsabilidades y el insoslayable castigo a los responsables. Estimamos que la lucha por garantizar el respeto a todos los derechos humanos, cobra vigencia en Sinaloa y en el país entero, frente a lo cual desde ahora y en primer lugar, los universitarios tenemos una principal responsabilidad.

Atentamente

Culiacán Rosales, Sin., enero 13 de 1983

SURSUM VERSUS

Lic. JORGE MEDINA VIEDAS,
Rector

IBQ. DAVID MORENO LIZARRAGA,
Secretario General